



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO: 61841/2013

AUTOS: “ESCO SOC. ANONIMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO c/ MIN. DE TRABAJO EMPLEO Y SEG. SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 48/66 contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Fiscalización del MTEySS, obrante a fs. 24/28 DRF N° 30598 del 6/7/2011 que impuso una multa al quejoso, en virtud de las infracciones cometidas al artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683.

Que contra ella, la contribuyente dedujo recurso de revisión que fue desestimado mediante Resolución DRF N° 82847 del 10/12/2012.

Que, notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N° 655/05 y sus modif.

Que a fs.77, el organismo ministerial ordenó la remisión de los presentes obrados a esta Alzada y verificado que fue el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, corresponde la apertura de la instancia.

Que, en orden a la cuestión debatida en estas actuaciones, en primer término cabe señalar que el artículo 36 de la ley 25.877 faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, que integran el Sistema Único de la Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades concurrentes con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Que del análisis de las constancias de la causa, surge que el presente se inicia a partir del relevamiento realizado en la ciudad de Formosa Capital, en donde el funcionario que intervino consignó que el Sr. Roberto Carlos Gomez se encontraba desarrollando la actividad de comisionista, pero luego se verificó que el Sr. Gomez actúa como promotor de seguros en el establecimiento relevado que no resulta ser de propiedad del accionante, puesto que la única sede comercial que posee ESCO SA se encuentra en el domicilio fiscal, o sea en la calle Gualaguaychú 763 de la ciudad de Paraná Entre Ríos. Ello es así pues ello surge tanto de los propios registros del organismo recaudador como también lo manifiesta la empresa citada en la audiencia de descargo y en los recursos interpuestos contra la multa determinada.

Que fs. 11 obra descargo de la empresa accionante en la cual consta que se presentó a través de su apoderado Sr. Matias Bernardo Shweizer. En dicha acta el apoderado de la firma manifiesta, en primer lugar, que el domicilio relevado no pertenece a la firma que representa y por otro lado que no conoce a la persona relevada. Agrega que su mandante tiene vedada la comercialización de los planes de capitalización y que sólo administra los fondos provenientes de planes de capitalización. Es decir que el objeto comercial es único e impuesto por la legislación vigente (Decreto 142277/43). Por ello, la comercialización de dichos planes la realizan los diferentes agentes mercantiles vinculados a ESCO SA.

Que por otra parte sostiene que el domicilio donde se efectuó el relevamiento no corresponde a la actora sino a una Agencia Mercantil titularizada por el Sr. Guillermo Quaranta CUIT 20-17263867-9 ofreciendo acompañar en autos copia del contrato de agencia celebrado entre ESCO SA de CAPITALIZACIÓN Y AHORRO y el agente mercantil de la ciudad de Formosa del cual surge la absoluta independencia y autonomía del mismo, hecho que no fue negado por el organismo.



Que por otra parte surge de autos que el supuesto empleado relevado Sr. Gomez, se dió de alta en el monotributo el 11/05/2006 Categoría B " Locación de Servicios, por lo que no deja dudas que el mismo desarrolla una actividad autónoma e independiente en la ciudad de Formosa.

Que de lo expuesto cabe concluir que si bien la persona relevada comercializa los planes que ESCO administra, ello lo hace conjuntamente con productos de otras compañías de seguros, situación que ajusta a su labor puesto que el mismo se desempeña como productor asesor de seguros amparado por la ley 22.400 y no existe pacto de exclusividad alguno con la empresa.

Que en oportunidad de abordar la cuestión planteada en los términos antes descriptos, la autoridad refiere que lo manifestado por la requerida así como la documental obrante en autos no la eximen de responsabilidad toda vez que, habiéndose encontrado al trabajador afectado prestando servicios para la imputada al momento del relevamiento, se presume la existencia del vínculo laboral. (Conf. Art 23 de la LCT)

Que en las condiciones descriptas, y sin haberse producido prueba en sede administrativa, cabe señalar que el actuar de la administración no puede subsumirse en una mera verificación de registro, pues ello importaría una inversión en la carga de la prueba (cfr. Wassner, Roberto, "Trámites, procedimientos, recursos administrativos y judiciales en previsión social, pág. 104 y ss.).

Que, en este punto señalamos que compartimos el criterio de que la presunción "juris tantum" de la existencia de la relación laboral en sentido estricto, debe verificarse al extremo, pues ello fundará una decisión administrativa de neto corte punitivo. Ello es así, pues en su actuar debe imperar el principio de verdad material o real, llevando a cabo las medidas que se consideren conducentes para incursionar a fondo en la realidad económica analizada (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 29.05.97, "Cooperativa de Provisión para Puesteros La Armonía").

Que así, el proceso administrativo debe brindar protección jurídica al particular a la par que asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general. Es por ello que la observancia de la regla del debido proceso adjetivo debe acentuarse aún más cuando el órgano administrativo resulta, al mismo tiempo, parte y juez dentro de una misma causa, pues en esa doble condición posee más información -inclusive de sus propios registros- que le facilita la constatación de las afirmaciones que efectúe el administrado. Por esa razón, el procedimiento administrativo recursivo debe ser abierto a prueba tanto cuando el órgano administrador lo crea necesario como cuando el administrado así lo solicita a fin de acreditar los hechos que invoca. Sólo así se garantiza su derecho de defensa, arribando a una mayor racionalización y eficacia de los trámites cumplidos, valorando las probanzas aportadas y conducentes para incursionar a fondo en la realidad económica analizada, primando así el principio de la verdad material o real, rector indiscutido de la labor fiscalizadora del cumplimiento de las obligaciones tributarias en general (C.F.S.S., Sala II, in re "INGENIO RÍO GRANDE S.A. c/ D.G.I." sent. 81407 del 31.10.00).

Que a tenor de lo expuesto, no habiendo siquiera dado respuesta a los argumentos expuestos por la contribuyente ni habiendo producido la prueba ofrecida oportunamente, no cabe más que hacer lugar al remedio deducido y revocar la resolución recurrida.

Que en cuanto a las demás cuestiones planteadas en el presente recurso, omitimos pronunciarnos por razones de economía y celeridad procesales, conforme lo dispuesto por la Excma. CSJN en autos "Wiater Carlos c/ Estado Nacional- M° de Economía s/ proceso de conocimiento donde sostiene que "los jueces no están obligados a tratar todas las argumentaciones de las partes sino sólo aquellas que se estimen decisivas para la solución de la controversia y el fundamento de sus conclusiones" (Doctrina de Fallos: 307: 2216 entre muchos otros).

Que, a mayor abundamiento señalamos que es pacífica la Doctrina y Jurisprudencia nacionales en el sentido que se le otorga el carácter autónomo e independiente al Agente Mercantil, por ser una figura típica del derecho comercial, al igual que los Productores Asesores de Capitalización que son figuras análogas a los Productores de Seguros, como en el caso que se ventila en autos.

Que, como consecuencia de la decisión que se adopta, corresponde ordenar la devolución del monto depositado en los términos del art. 15 de la ley 18820, con más los intereses correspondientes calculados con base en la tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina.

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE:** 1) Declarar formalmente admisible el recurso interpuesto, hacer lugar al mismo y revocar la resolución recurrida; 2) Ordenar la devolución de las sumas ingresadas en cumplimiento de la exigencia prevista por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

el art. 15 de la ley 18.820 con más el interés que resulte de aplicar la tasa pasiva para el uso de la justicia que publica el B.C.R.A; y 3) Sin costas en la Alzada por no haber mediado sustanciación (art. 68 del C.P.C .C.N.).

Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.). Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Protocolícese, notifíquese, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 del R.J.N)

